¿Qué es el GIEI? ¿En qué consiste el grupo de investigación y cuál era el principal motivo de su existencia?

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes se crea como un instrumento para el cumplimiento de unas medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana a los 43 desaparecidos y sus familiares. Como parte de esa medida cautelar se estableció un grupo de expertos que hiciera el monitoreo, el seguimiento, con cuatro puntos de mandato básicamente. Uno que tenía que ver con la investigación que había hecho el Estado y dar recomendaciones sobre esa investigación; un segundo que tenía que ver con la búsqueda de los desaparecidos, para evaluar lo realizado en la búsqueda y dar recomendaciones sobre la búsqueda; un tercer punto, que tenía que ver con atención a las víctimas —evaluar lo que había hecho el Estado sobre la atención y dar recomendaciones para la atención—; y un cuarto punto de evaluar y dar recomendaciones sobre las políticas de desaparición forzada en México, más en general y no sólo en el caso de los 43. Es un mecanismo novedoso, es la primera vez que se crea un grupo de estas características. Un grupo interdisciplinario con un mandato amplio, no solamente sobre la investigación, sino también sobre la búsqueda, la atención a las víctimas, etcétera.

¿Cómo llegaste al grupo?

Bueno, yo estaba trabajando en varios países con familiares de desaparecidos. Más en general, a través de un trabajo psicosocial con organizaciones de víctimas que se estaban creando en los últimos años, cuando sucedió el caso de los 43. A partir de ahí se estableció como una metodología de trabajo —de esto nos enteramos después— entre el Estado, los representantes de las víctimas y con la CIDH, para ponerse de acuerdo en un listado de perfiles de gente que sería finalmente la que configuraría el grupo. A mi me contactaron a finales de diciembre desde la Comisión para ver si estaría dispuesto para participar en el grupo. Yo dije que sí, sin saber quiénes eran los otros miembros del grupo. Creo que ninguno de nosotros sabía quiénes eran el resto de las personas que habían seleccionado hasta que oficialmente se dio el nombramiento a finales del mes de enero.

En la presentación del primer informe se intentaba llegar a una especie de acuerdo con el Estado para que se comprometiera a ayudar. ¿Hubo un cambio de actitud del Estado antes del primer informe y después, o realmente fue una continuación?

Lo que pasó cuando presentamos el informe es que estábamos en un periodo intermedio de negociación para ver si había condiciones y cuáles eran éstas, para una extensión del mandato y poder seguir con nuestro trabajo. Esto a la vez que habíamos presentado un informe que era bastante claro y dejaba de lado muchas de las cosas que se habían incorporado a esa llamada “versión histórica de los hechos”, como por qué habían ido los normalistas a Iguala y que no habían ido a boicotear un acto político, que no habían sido confundidos con un grupo del Cartel de los Rojos contrario a Guerreros Unidos, que todas las corporaciones de seguridad tenían conocimiento e

información sobre la llegada de los normalistas, que los normalistas no fueron llevados al basurero de Cocula, asesinados y quemados esa noche los 43 en las condiciones en las que se había contado, etc.

Bueno, cuando hicimos la versión contando todas esas cosas nosotros dijimos: es una verdad incómoda, pero es una verdad saludable para el Estado porque puede ayudar a hacer una investigación más efectiva. A partir de ahí se abre un proceso de diálogo y de discusión sobre cuáles eran las condiciones para poder seguir con un segundo mandato. Nosotros dijimos que para poder continuar necesitábamos nuevas condiciones, que no se podía seguir con las mismas reglas de la primera parte. Esto significaba que el caso tenía que salir de la sección del Crimen Organizado, que es la sección de la PGR que estaba investigando el caso, que necesitaba una mirada más fresca sobre las diferentes líneas de investigación, que no estuviera casada con la línea del basurero y todo lo que se había contado hasta entonces; un ente de investigación en el cual tuviéramos también más confianza y que generara credibilidad, visto que hubo numerosas deficiencias, negligencias y cosas tal vez más intencionales en algún caso que habían bloqueado la investigación al principio, que habían desviado la investigación en algunos aspectos. Entonces logramos ese acuerdo en la CIDH el 20 de octubre y a partir de ahí se inició un segundo mandato. Empezamos a trabajar bien con el nuevo equipo, siempre en una mezcla de hacer seguimiento a lo que significaba asumir un caso de esa complejidad, la lectura de los tomos que tenían que hacer los nuevos fiscales...empezamos a trabajar bien durante esos dos primeros meses, hicimos el documento de 20 páginas que dimos a la PGR con nuestras sugerencias para la investigación, cuáles eran las líneas que había que seguir según nosotros y también sobre la atención a las víctimas y la búsqueda. Sin embargo, a partir de ahí lo que vimos es que después de dos meses, prácticamente a partir de enero de este año 2016, se fueron poniendo obstáculos, la investigación se fue ralentizando, muchas de las cosas que habíamos pedido que se hicieran no se estaban haciendo o se estaban retrasando de forma injustificada y se estaban dando pasos para volver otra vez al escenario del basurero. De repente había algunas capturas de gente que aparecía detenida por SEIDO (Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada). O sea no por el mismo equipo, sino por el antiguo equipo. Se les había detenido por portación de armas pero se les preguntaba por el caso de los 43, daban versiones de los 43 que parecían similares a los anteriores. Cuando fuimos a hacer una diligencia a un lugar de búsqueda muy importante nos encontramos con que SEIDO había ido antes que nosotros, y ese tipo de cosas. Vimos que alguien estaba bloqueando y nos hicieron ver que alguien estaba controlando la investigación y no era el equipo con el que había colaborado en formal. A partir de ahí empezaron a haber numerosos problemas que fuimos señalando en nuestros cuestionamientos públicos casi mensuales.

El GIEI tiene un segundo periodo de trabajo. ¿Qué ocurrió con las pruebas que mostrásteis en el segundo informe?

En ese tiempo, en los últimos meses, fuimos acumulando las pruebas que pudimos, tomando los testimonios que pudimos, analizando el expediente y viendo las cosas que se iban avanzando —que no eran las que nosotros habíamos pedido pero de algunas

de ellas teníamos la documentación—, y con eso fuimos construyendo lo que iba a ser nuestro segundo informe. En ese contexto, ocurre lo del basurero de Cocula. Nosotros habríamos llegado a un acuerdo a partir de la insistencia de la PGR en Washington, en octubre del año pasado, firmamos uno de los puntos que tenía que ver con que se iba a hacer un nuevo peritaje sobre el basurero porque la PGR quería hacerlo, en base a establecer criterios comunes entre la PGR y nosotros, de quiénes serían los expertos, cómo se tenía que hacer ese estudio para que ofreciera credibilidad respecto a los resultados, etcétera.

Nosotros habíamos incluido ya en nuestro informe un peritaje del doctor Toledo que señalaba que de haberse quemado, los 43 no habían podido pasar esa noche en esas condiciones en ese lugar, y la PGR sin más quería hacer un peritaje nuevo que volviera a hacer un consenso científico sobre el caso. Nosotros firmamos un documento, participamos en la selección de los peritos que trabajarían en ese caso. Tres fueron nombrados por la PGR, tres fueron nombrados por nosotros. Hicimos los criterios que se debían llevar a cabo y el plazo para presentar ese trabajo era el 31 de marzo. Cuando llegó el 31 de marzo uno de los expertos que servía como vocero del grupo vino a México a presentar su informe y cuando estábamos en la reunión tal y como había acordado con la PGR (que íbamos a discutir qué hacer con ese estudio y ver qué resultados tenía) el perito nos dijo que el estudio era un estudio provisional, que no habían podido determinar si el objetivo del estudio que se les había encargado era determinar si ese hecho habría podido pasar según los elementos que había en el basurero, que necesitaban hacer unas pruebas experimentales, y que tenían un documento preliminar. Nosotros pedimos en ese momento poder examinar con tiempo el documento preliminar, poder leerlo, y a partir de ahí analizar con la PGR cómo comunicarlo, qué hacer con eso tanto con respecto a los familiares como con respecto a la sociedad mexicana; cómo darlo a conocer. Sin embargo en ese momento la PGR tomó la decisión de hacer una rueda de prensa —que incluso ya estaba convocada antes de esa reunión— y dar a conocer tres puntos que el vocero dio a conocer sin tener en cuenta nuestro criterio, en contra de lo que nosotros habíamos propuesto y rompiendo el consenso al que habíamos llegado con la PGR.

Todo eso supuso para nosotros una ruptura, un punto crítico de los problemas que se iban acumulando, y que mostraban el intento de parte de sectores de la PGR de volver atrás a costa de lo que fuera, incluso de romper los consensos básicos de trabajo con el grupo. A partir de ese escenario de ruptura empezamos a buscar el conjunto de otra documentación sobre el basurero par ver otros elementos que podríamos contrastar con ese informe que se nos presentó, que era un informe preliminar, que no tenía ninguna conclusión, no tenía ningún análisis científico de las cosas que se pedían, era de muy mala calidad. Entonces empezamos a buscar otros elementos del propio basurero y del escenario del Río San Juan que estaba ligado en el sentido de que algunos de los inculpados habían dicho que después de la quema masiva de los normalistas, habrían metido los restos en unas bolsas de plástico, las habrían llevado de nuevo hacia el pueblo, y los habrían tirado en el Río San Juan como una forma de hacerlos desaparecer. Buscando la documentación sobre eso, buscando en el expediente, contactando a periodistas que habían estado en el escenario del basurero y del río. Encontramos ahí documentación gráfica que mostraba que a pesar de que oficialmente toda la historia del río empieza el día 29 cuando llegan unos buzos a explorar el río,

encuentran supuestamente la bolsa, después se lleva al inculpado para que reconozca el lugar, etcétera, lo que encontramos es que todo eso en realidad se había empezado el día 28. El día 28 se presentó en el lugar el jefe de de la agencia de investigación criminal, Tomás Cerón, con el inculpado que después iba a ser llevado el día siguiente para reconocer el sitio. Se presentó el día anterior en un momento en el que no había nadie, no sabemos para qué se le llevó ahí, no hay constancia en el expediente sobre esas acciones, o sea no son diligencias que estén incorporadas al expediente. Por otra parte unos minutos después apareció personal y funcionarios de servicios periciales de la PGR que empezaron a buscar y encontraron evidencias óseas que fueron recogidas y fueron fotografiadas, fueron realizados registros de video pero ninguna de esas acciones estaba en el expediente. Encontramos en el expediente una fotografía de la bolsa donde supuestamente habrían sido encontrados los restos que ponía una etiqueta con el día 28 de octubre, o sea el día anterior al día que supuestamente se encontró la bolsa. Bueno, con todos esos elementos reconstruimos la historia para plantear públicamente que en ese escenario había habido una manipulación de la escena del crimen, habían entrado peritos sin hacer ningún registro oficial, no había en el expediente ninguna documentación fotográfica ni videográfica sobre lo que se había realizado, se había llevado a un inculpado después de dar su declaración sin abogado a ese escenario, ese inculpado fue torturado, tenía serias lesiones que mostraban indicios de tortura unas horas antes después de su detención y que todos esos elementos debían ser investigados porque suponen un cuestionamiento de la historia del río. Como sabes hay un cuestionamiento central en ese escenario que tiene que ver con que en esa bolsa supuestamente apareció un resto óseo a través del cuál fue identificado Alexander Mora, uno de los normalistas desaparecidos.

En tu intervención en la presentación de este segundo informe te centraste en lo que era la víctima y cómo se entiende el dolor de la víctima. Señalaste que había que diferenciar entre reconocimiento y reparación. ¿Te importa explicar esto?

Si, cuando uno piensa en los familiares de desaparecidos —y esto lo hemos discutido mucho con el Estado en distintos momentos— lo que los familiares esperan y necesitan es un trato digno, empatía y escucha; que haya una comprensión de su experiencia. Necesitan comunicación directa, que no se les mienta, que no se les diga una cosa y luego sea otra, que se les informe antes a ellos de cualquier elemento relevante para la investigación o que tenga que ver con el paradero de sus hijos, que se les informe antes a ellos de que se filtre la información a través de los medios, y eso es una cuestión clave para poder hacer una investigación. No se puede hacer una investigación sin tener en cuenta las víctimas y estos dos elementos deben ir de la mano. No son dos cosas disyuntivas ni van por caminos diferentes, tienen que incorporarse a una perspectiva del litigio, de la investigación y de la atención. En ese momento lo que los familiares necesitan es la verdad. Lo que nos dicen cuando nosotros llegamos el primer día a la escuela, en la primera reunión, es: dígnanos siempre la verdad, eso es lo más importante para nosotros.

También hay que tener cuidado con el lenguaje, cómo se usa el lenguaje, porque a veces ese lenguaje transmite visiones que chocan mucho con la visión de la víctima. Por ejemplo, con el uso de la palabra reparación: para muchas víctimas significa más de

lo que le van a pagar económicamente y cuáles son los montos que el Estado va a dar. Y el Estado muchas veces está pensando en ese tipo de reparación y los familiares están en otro momento, pensando dónde están sus hijos, si quieren buscarlos, si tienen la verdad de lo sucedido. Y lo que sí necesitan es reconocimiento. Todas las formas de reparación: la económica, la moral, la verdad, la justicia... en realidad, son formas de reconocimiento de lo pasado, de lo sucedido, y formas de reconocimiento de la dignidad de la víctima. Y eso es el elemento clave para poder hacer algo que sea "reparador". Le dijimos al Estado "no usen nunca la palabra reparación porque eso tiene otro significado para la gente, para la sociedad en general", y es muy importante, sin embargo, que haya un reconocimiento hacia los familiares porque ese reconocimiento es lo que va a generar también confianza. Sino la gente siente que su historia nunca tiene un marco social de reconocimiento, siempre está excluida. Y le hemos dicho al Estado "hay que cambiar la narrativa de los hechos". Porque siguen manteniendo la narrativa de los hechos de la llamada "verdad histórica" que es una verdad construida en base a las declaraciones de ciertos perpetradores, una verdad estigmatizante frente a las víctimas que acusa a algunos de los normalistas de ser del Cártel de los Rojos, de estar infiltrados. Esa narrativa tiene que cambiar. Que la gente encuentre que su experiencia y lo investigado por el grupo tiene un marco de reconocimiento en la historia oficial, y esa historia oficial no sigue estando empeñada en producir las visiones del pasado que han quedado superadas y que hemos demostrado en la práctica que no son ciertas, necesita ese marco de reconocimiento y eso es lo que para la gente va a ser positivo. Lo otro, empeñarse en hablar de las políticas de reparación cuando la gente está en el proceso de búsqueda, investigación, va a ser visto como un intento de cerrar un capítulo de la historia por parte del Estado y va a ser inaceptable para los familiares.

¿Qué te pasó por la cabeza cuando, sentado delante de todos los familiares, amigos, seguidores de la causa, empezaron a gritar: "no se vayan"? ¿Qué se siente cuando ocurre algo así?

Bueno, se le pone a uno la piel de gallina. Siente uno la emoción que transmite esa manifestación masiva del grito de mucha gente. Y del grito silencioso que hemos escuchado muchas veces. Ese "no se vayan" nos lo han dicho los familiares: "ustedes no se pueden ir hasta que quede esto aclarado", nos lo ha venido diciendo mucha gente con la que nos hemos reunido y era como la expresión de muchos gritos en silencio que escuchamos durante todo este tiempo. Esto demuestra por una parte también la necesidad que la gente tiene de tener personas que generen la confianza y la credibilidad para hacer una investigación. Si hay una cuestión clave en México es la ausencia total de confianza de las víctimas respecto al Estado. Para que te hagas una idea, otra de las cosas que nos dijeron la primera vez que nos reunimos en la escuela fue "ustedes tienen nuestra confianza". Aunque la confianza es algo que hay que ganarse siempre, obviamente nosotros llegábamos al país por petición y demanda de los familiares, pero también nos dijeron otra cosa que no habían dicho a ningún país, nos dijeron: "por favor no se vendan". Y eso que fue una demanda para la cual era muy fácil una respuesta de parte nuestra en términos de "obviamente no nos vamos a vender. Hemos venido a hacer un trabajo serio, profesional, comprometido con la verdad del caso y los derechos humanos". Pero eso significa lo que hay detrás para que uno tras otro, muchos de los familiares que tomaron la palabra, nos dijeran eso y

entonces todos esos elementos se juntaron ese medio día en que la gente se levantó y comenzó a gritar: no se vayan, no se vayan. Y es una demanda colectiva de verdad, de justicia y de credibilidad, y de que nos quedáramos en el país para poder avanzar en esa situación a pesar de que ya sabíamos que la decisión del Estado había sido que no iba a haber una prórroga del mandato.

¿Cómo está ahora la situación del caso?

Bueno, nosotros dijimos que aunque el grupo finalice su segundo mandato, las medidas cautelares de la Comisión siguen y lo que está en discusión ahora es cuál es el mecanismo de seguimiento para estas medidas cautelares. Debe articularse un mecanismo de seguimiento *ad hoc*, nuevo, no como un mecanismo habitual para otras medidas cautelares, que dé seguimiento al trabajo que nosotros hemos hecho y las recomendaciones que hemos planteado para la investigación, búsqueda y atención a las víctimas. Y eso es lo que está en discusión ahora, la CIDH, en el diálogo con el Estado y los peticionarios, tendrá que articular ese mecanismo que tendrá que incluir según señaló la misma Comisión, visitas al país, hacer informes de seguimiento, el acceso a las información a las víctimas y a todo lo que se necesite para poder hacer una evaluación de las recomendaciones que hemos hecho para el seguimiento del caso. Y nosotros también estamos esperando que la Comisión y las partes definan cuál va a ser ese mecanismo. Creemos que es muy importante que ese mecanismo no sea una manera habitual de cómo se hace el seguimiento de medidas cautelares sino que sea un mecanismo *ad hoc*, específico, que esté a la altura de lo que se ha hecho en el caso y del desafío que supone en la búsqueda y en la resolución del caso y de la superación de muchos de los obstáculos que hemos encontrado hasta ahora. Nosotros quisimos hacer públicos esos obstáculos como una manera de que en el tiempo de aquí en adelante se puedan superar y lo que tendrá que ver ese mecanismo de seguimiento es si esos obstáculos se superan o no para poder avanzar en la investigación.

-¿Entonces tú todavía quedas vinculado al GIEI o al caso?

Bueno, el GIEI no existe más como un grupo pero los cinco miembros del grupo le hemos dicho a la Comisión que puede contar con nosotros en términos de la discusión sobre el mecanismo de seguimiento, sobre el conocimiento del caso que nosotros tenemos y cómo eso puede ser útil para ese mecanismo de seguimiento. No sabemos términos formales qué pasos se van a dar o cuáles son las decisiones que se van a tomar pero el grupo sigue muy pendiente del caso y, hombre, nos llevamos a la gente en el corazón. Ha sido una experiencia tremenda por un lado de la investigación y el trabajo que nos ha tocado hacer en este tiempo, y por otro lado la experiencia pues profunda de sentido humano y de cariño y respeto por los familiares y la gente que quiere impulsar la defensa de los derechos humanos en ese país, pues es muy importante y eso está de más seguir aquí y ver cómo podemos apoyar en el futuro para que el caso pueda resolverse de una manera digna y según los estándares internacionales y no se siga llevando el ocultamiento, fraccionamiento o poniendo obstáculos para que no sepamos realmente qué pasó con los normalistas ni se llegue a los responsables tanto directos que ordenaron, como los que no han hecho nada por llevar adelante la investigación ante la justicia.

Por último, ¿crees que esta experiencia del GIEI sería algo bueno para aplicar en casos como el de Berta Cáceres en el que la familia está pidiendo también que haya un grupo de investigación de expertos independientes? ¿Crees que sería algo aconsejable, según tu experiencia?

Yo creo que la experiencia es muy positiva y a pesar de las enormes dificultades que hemos tenido y los obstáculos para poder llegar al final de nuestro trabajo, creo que hay que resaltar al GIEI como una experiencia muy positiva de investigación. Cuando llegamos al país, la confianza de las víctimas con el Estado estaba rota, la investigación estaba cerrada, no había más investigación que hacer. Y pesar de las enormes dificultades también ha habido avances muy significativos y la manera en cómo hemos trabajado, más cercana al tiempo real, de una perspectiva más interdisciplinaria, apoyando al Estado a hacer ciertas cosas y a la vez haciendo nosotros parte de la investigación, empujando para una investigación más efectiva; creo que el mecanismo ha resultado muy útil. Y puede ser un mecanismo para otro tipo de casos. Claro que en cada situación habrá que evaluar las circunstancias del caso y lo que sería necesario, pero sí creo que el GIEI muestra una manera novedosa de trabajar que ha sido útil y efectiva de una perspectiva más integral y en la que a pesar de los obstáculos hay logros muy significativos. Entonces, creo que para ese caso [el de Berta] y otros —porque han habido otras gentes que nos han contactado para por lo menos pedir ideas y metodologías de cómo hemos trabajado—, es una puerta también para el Sistema Interamericano y para los países para ver en estos mecanismos una ayuda para resolver casos complicados como estos, eso nos parece que es una buena noticia y que debería pensarse más con el propio SIDH y con casos de otros países la posibilidad de que algún tipo de mecanismo o las metodologías que hemos usado nosotros sean útiles también para otros casos.

¿Ahora toca descanso o ya estás metido en otro jaleo?

No, ya estoy metido en otro. Estoy haciendo un informe sobre las víctimas saharauis de desaparición forzada y minas antipersona, y empezando un informe de víctimas del franquismo del País Vasco de una comisión oficial que hemos trabajado en los últimos dos años en documentar casos que nunca habían tenido reconocimiento ni reparación, una pequeña comisión de la verdad para casos de año 60 al año 78 y tengo que hacer el informe sobre eso.